

María Dolores Elizalde Pérez-Gruoso

**CIRCUNSTANCIAS QUE RODEARON
LA PÉRDIDA DE FILIPINAS EN EL 98**

1 de Octubre de 1998

**D^a MARÍA DOLORES ELIZALDE
PÉREZ-GRUESO.**

DOCTORA EN H^a CONTEMPORÁNEA POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, HA CENTRADO SUS ESFUERZOS INVESTIGADORES EN LOS HECHOS DEL 98, Y EN PARTICULAR EN EL IMPACTO QUE TUVIERON EN LAS ISLAS FILIPINAS Y LA MICRONESIA.

TRAS 2 AÑOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR EN LA ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE LONDRES, SE INCORPORÓ HACE UNA DÉCADA AL CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (C.I.S.C.), EN CUYO CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DESARROLLA SU TRABAJO.

HA PUBLICADO NUMEROSOS ESTUDIOS SOBRE EL CONFLICTO HISPANO-NORTEAMERICANO, CON EL PACÍFICO COMO ESCENARIO.



El presente trabajo refleja el texto de la conferencia que impartí en Ferrol el 1 de Octubre de 1998, en el seno de la Cátedra «Jorge Juan», nacida del acuerdo de colaboración entre la Universidad de A Coruña y la Zona Marítima del Cantábrico. Quiero agradecer a sus responsables la invitación que me cursaron para participar en los ciclos de conferencias que periódicamente desarrollan. Y quiero dejar constancia, de manera muy especial, de mi agradecimiento a Manuel Sánchez-Moraleda, entonces director de la Cátedra, por la cordialísima acogida que nos dispensó con ocasión de la conferencia.

Meses después de aquel encuentro, corrigiendo la edición definitiva de la charla, recordaba que horas antes de la conferencia hubo una rueda de prensa, en la que varios periodistas me preguntaron por las ideas principales de lo que iba a ser mi intervención. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron sendos artículos que, en líneas generales, recogían con bastante fidelidad mis palabras. Sin embargo, me llamaron la atención los titulares que ofrecían. Decía, uno de ellos: «La pérdida de Filipinas se recibió con alivio» (El Ideal Gallego, 2 Octubre 1998). El otro, matizaba un poco más: «El desastre se vivió con alivio» («La voz de Galicia», 2 Octubre 1998). E insistía en el interior: «La pérdida de Filipinas se sintió con alivio. La guerra del 98 había sido tan cruenta que, cuando acabó, la impresión popular fue de alivio».

Ambos titulares me hicieron reflexionar. Porque si bien es cierto que el final de la guerra con los Estados Unidos, y el cese de las pérdidas humanas que las guerras coloniales originaron entre la población española, fueron recibidas con alivio; es aún más cierto que la pérdida de Filipinas en sí misma no fue un alivio, sino más bien una inesperada y desagradable sorpresa, tanto para el Gobierno, como para autoridades coloniales y para los grupos de interés introducidos en el archipiélago. La pérdida de Cuba era una circunstancia –quizás no deseada– pero esperada por todos. La evolución de la isla y las pretensiones norteamericanas en ella así se lo habían hecho comprender a los responsables gubernamentales y a los empresarios que operaban en las Antillas, más allá de las noticias que pudieran dar los medios de comunicación o de la aparente desorientación de la opinión pública. Sin embargo, antes de que, durante la guerra de 1898, Estados Unidos interviniera en Filipinas, nadie había pensado que la soberanía española en aquellos archipiélagos estuviera llegando a su fin. También había problemas en el archipiélago oriental, pero la confianza en un futuro esperanzador en las islas superaba con creces las dificultades.

Además, la pérdida de las Filipinas en aquella fecha contradecía la política que el Gobierno había iniciado en los años ochenta para mejorar la administración y gobierno de las islas; fue un duro revés para la reactivación económica que el Estado estaba impulsando en el archipiélago; iba en contra de los intereses de los sectores españoles más introducidos en Filipinas –órdenes religiosas, compañías privadas, militares y estrategias–; y, finalmente, cortaba en seco las esperanzas de futuro que, a fines del XIX, representaban las Filipinas dentro del panorama colonial español. Todo ello provocó que la pérdida de estas islas fuera sentida por la población, lamentada por los inversores y vivida con un cierto desencanto por la administración colonial. Y eso, a pesar de que no se produjera en el momento de la pérdida del archipiélago una reacción popular similar a la que otros episodios de frustración ultramarina –como por ejemplo la crisis de las Carolinas de 1885– había provocado entre la opinión pública española.

En suma, las Filipinas interesaban a la sociedad española de fines de siglo. En contra de los estereotipos al uso de islas lejanas y olvidadas por la administración y por los inversores, me parece interesante resaltar la imagen de Filipinas como una esperanza para el porvenir español. Filipinas se

definía ya en aquellos años como una sociedad colonial en auge, integrada en el contexto imperialista e internacional de la época, y que adquiriría una significación propia en aquel Pacífico en plena expansión y eclosión a fines del XIX. Veamos, por tanto, a continuación cómo eran las Filipinas en 1898, antes de que se vieran afectadas por el desarrollo de la guerra hispano-norteamericana.

LAS FILIPINAS EN 1898

Las islas Filipinas, en 1898, estaban definidas por la encrucijada de varios factores:

- 1- Un gobierno colonial ejercido por España, cuya vinculación al archipiélago databa de trescientos años antes. En ese período se habían creado distintos sistemas de administración y explotación, y en las últimas décadas del siglo XIX la Metrópoli mostraba un renovado y creciente interés por aquellas islas.
- 2- Una realidad indígena marcada por la diversidad étnica, religiosa, lingüística y geográfica. En las más de siete mil islas que componen el archipiélago, vivían siete millones de habitantes, con características y modos de vida diferentes. Sin embargo, tenían rasgos comunes, como la permanencia de la política local en manos indígenas, la dedicación mayoritaria a las actividades agrícolas volcadas hacia el comercio exterior, y la aparición de una nueva clase media ilustrada y comprometida con el desarrollo económico de las Filipinas.
De esta población indígena filipina había nacido un movimiento nacionalista, marcado en 1898 por el reciente fin de la rebelión de 1896. Los líderes de esta rebelión habían sido relegados al exilio por el pacto de Biac-Na-Bató, pero en Filipinas permanecía viva la lucha en defensa de los derechos políticos filipinos y de los ideales de plena independencia.
- 3- La implantación de importantes intereses internacionales. Entre ellos destacaban la actividad de compañías de comercio, las em-

presas dedicadas a las comunicaciones o a la construcción, las inversiones y la presencia de bancos de distintos países, fundamentalmente de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia.

- 4- Sobre una realidad definida por esos tres factores, se superpusieron las ambiciones hacia Filipinas que los Estados Unidos pusieron de manifiesto durante la guerra hispano-norteamericana. La guerra fue entablada por Cuba, pero tuvo un inesperado giro oriental cuando se produjo el ataque de Dewey a la escuadra española en Cavite, primero, la lucha por la conquista de Manila, después, y, finalmente, la reclamación de la anexión de todo el archipiélago por parte de los USA.

De esta forma, en el cruce de esas circunstancias, en 1898, en pleno auge de la expansión y del reparto colonial del Pacífico, y en el momento de definición de áreas de influencia en el Extremo Oriente, los intereses contrapuestos de cada una de esas fuerzas se enfrentaron para defender su posición en Filipinas. En una lucha de desigual equilibrio y difícil solución, imperó la voluntad del más fuerte, y las islas –nación filipina pese a todo– pasaron de ser colonia española a ser territorio anexionado de los Estados Unidos.

EL GOBIERNO ESPAÑOL DE LAS FILIPINAS EN 1898

La primera circunstancia que llama la atención en el gobierno español de Filipinas, a fines del siglo XIX, es su peculiar situación jurídica. En el artículo 89 de la Constitución de 1876, que fijaba el marco legal del régimen político de la Restauración, las Filipinas fueron definidas como provincia ultramarina sujeta a leyes especiales. Era una provincia española, pero dadas sus peculiares circunstancias, quedaba privada de los mismos derechos que las demás provincias españolas, y se la diferenciaba incluso de las Antillas. El ideal de partida era asimilista, y proponía extender a aquellos archipiélagos las mismas leyes y costumbres que regían en la

Península. Pero, en la práctica, la realidad aconsejó la diferenciación y la igualdad quedó desvirtuada. Las islas se gobernaron por reales decretos que no pasaban por Cortes, los filipinos no consiguieron la representación parlamentaria —que curiosamente ya habían tenido en los tiempos de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal—, y ni siquiera en Filipinas los nativos obtuvieron los mismos derechos que los peninsulares.

El Gobierno colonial tenía un marcado carácter militar, al estar controlado por autoridades del Ejército y de la Marina. El Gobernador General de las islas era el representante de la nación, delegado de los ministerios de Ultramar, Guerra, Marina y Estado. Sus atribuciones concernían al mantenimiento de la integridad del territorio, la observancia y ejecución de las leyes, la conservación del orden público y la protección de las personas y propiedades. Tenía el mando superior del Ejército y de la Armada en las islas y todas las demás autoridades del archipiélago le estaban subordinadas. Estaba auxiliado por una Junta de Autoridades, con carácter meramente consultivo, con lo cual su poder en el plano político y militar era amplísimo.

El archipiélago estaba dividido en distritos, administrados por gobernadores civiles y político-militares, que se encargaban de los asuntos gubernativos, económicos y militares. Dependían directamente del Gobernador General, aunque debían dar cuenta de sus actividades económicas al Intendente General de Hacienda y de las cuestiones de administración local y fomento al Director de Administración Civil. De la justicia en las islas se ocupaban la Audiencia de Manila y la Audiencia de Cebú, representadas en el archipiélago por los alcaldes mayores y por los jueces de paz, estableciéndose así una separación de poderes.

La Marina también tenía un gran peso en las islas. Buena parte de los cargos de la administración de las islas estuvieron desempeñados por marinos de los distintos cuerpos de la Armada. Además, se encargaba de la defensa y de las comunicaciones entre los distintos pueblos e islas del archipiélago. A pesar de los esfuerzos de este ramo, y debido a su falta de medios, existió en las islas una debilidad defensiva notable, que impidió un control efectivo sobre la totalidad del archipiélago. Esta circunstancia permitió que en numerosos puntos se desarrollaran unas élites nativas sin intereses en común con los españoles, o que en determinadas áreas perma-

neccieran focos de resistencia a la autoridad colonial escasamente reconocida y se produjeran insurrecciones relativamente frecuentes.

En el gobierno de las islas existió, en las últimas décadas del XIX, una dicotomía importante entre los partidarios de introducir reformas, de modernizar, y aquellos que apoyaban a ultranza la defensa de la situación, el mantenimiento del *statu quo*. La tensión entre estas dos fuerzas fue continua. A pesar de que se intentaron reformas importantes, como las propuestas por Manuel Becerra y por Antonio Maura –que afectaron sobre todo a la administración y representación local y a la educación, que se intentó independizar de las órdenes religiosas–, prevaleció la opción más conservadora. Ante el temor de que medidas renovadoras pudieran propiciar amenazas a la soberanía o a los intereses españoles, se prefirió proteger, consolidar, reforzar, y no cambiar.

Las órdenes religiosas tuvieron un peso considerable en la vida y en la organización de las islas, debido a dos circunstancias: a)- fueron, frecuentemente, los únicos representantes de la administración colonial en aquellos puntos o pueblos donde no llegaron otros funcionarios, por lo que ejercieron una labor de interlocutores entre el gobierno y los indígenas, y desempeñaron funciones muy amplias, que abarcaron el campo religioso, el educativo, y el económico; b)- fueron, además, grandes propietarias de tierras rústicas y de suelo urbano, y participaron en actividades comerciales, ejerciendo incluso de prestamistas, lo cual les dio una influencia notable en el desarrollo de las islas.

Otra peculiaridad destacable del gobierno de Filipinas fue el mantenimiento de la vida política local en manos de los propios indígenas. Las élites filipinas dominantes se convirtieron en los intermediarios entre las autoridades españolas y la población nativa, favorecidos por la propia administración colonial. Los antiguos «datos» fueron nombrados cabezas de barangays y encargados del gobierno local, del control orden público y del cobro de los tributos.

En el terreno económico, a partir de los años 80 se había iniciado en Filipinas una nueva política. El objetivo, en el fondo, era el mismo que el que se había perseguido siempre en estas islas. El Gobierno español, influido por distintos grupos de interés, había defendido a través de los siglos su intención de mantener su soberanía en el archipiélago por razones

políticas, estratégicas, evangélicas, y –en ocasiones– comerciales. Pero también tuvo claro que las islas debían producir el menor gasto posible a la Corona, por lo que debían buscarse las soluciones para su autofinanciación.

Las fórmulas empleadas habían sido múltiples. En los primeros años de colonización, las Filipinas fueron tierras de encomiendas, donde el cultivo de determinados productos se orientaba hacia la exportación. Fueron también, durante mucho tiempo, una base fundamental en la ruta del Galeón entre Acapulco y Manila. Sirvieron como puente y puerta de los mercados asiáticos que desde Manila se reexportaban hacia el resto del mundo vía Nuevo Méjico. Asimismo, produjeron rentas gracias a diversos tipos de impuestos sobre los naturales y gracias a la prestación de trabajo obligatorio por parte de su población. Los beneficios obtenidos a través de estos sistemas se completaban con la llegada de los situados, esto es, con la transferencia desde las cajas novohispanas de unas cantidades de dinero que retornaban a Manila procedentes de los ingresos arancelarios recaudados en Acapulco de los barcos que venían de Filipinas con mercancías chinas. Sólo cuando todos los gastos de la administración, defensa y evangelización de Filipinas estaban cubiertos, el remanente se ingresaba en las arcas mejicanas y repercutía favorablemente en la economía del resto del Imperio. Mediante este complejo entramado se consiguió, en una primera etapa, que el archipiélago filipino se autofinanciara.

A mediados del siglo XVIII este modelo comenzó a manifestar deficiencias. La invasión británica de Manila, en 1762, reveló sus carencias defensivas. Desde órganos gubernamentales se reconoció la necesidad de modernizar la administración y de dinamizar la economía de las islas. Se decidió permitir el tráfico directo entre Filipinas y la Península, y se creó una compañía privilegiada para la explotación del archipiélago, la Real Compañía de Filipinas. Esta reorientación del comercio filipino se completó, ya en 1834, una vez perdidas las colonias americanas de las que Filipinas había dependido en su proyección exterior, con la paulatina apertura de los puertos al tráfico internacional. Al tiempo, se decidió potenciar el monopolio sobre el tabaco y los alcoholes indígenas –que se convirtieron en la actividad fundamental en las islas durante este período. Y, finalmente, se reforzaron los sistemas impositivos sobre la población. De esta

forma se creó un nuevo sistema económico que posibilitó la rentabilidad de las islas desde fines del XVIII hasta mediados del XIX. Sin embargo, en los años setenta la crisis de la hacienda filipina era alarmante. Se hizo necesario, de nuevo, idear nuevas fórmulas de explotación y financiación.

En los años ochenta empezaron a plasmarse las primeras soluciones. Éstas reflejaron el empeño del Estado por dinamizar la economía de las islas, convirtiéndose en el principal agente de modernización económica, al no haber en Filipinas una iniciativa privada de magnitudes tan importantes como la que existía en las Antillas. En ese empeño, el Gobierno decidió en 1882 el desestanco del tabaco —ya se había procedido al de los alcoholes—. Potenció las inversiones públicas y privadas, a consecuencia de lo cual se crearon importantes compañías de explotación. Impulsó también el comercio, primando los intereses españoles peninsulares. Tras la aprobación del arancel de 1891, adoptó una nueva política proteccionista, que impulsó decididamente la entrada de productos españoles en el archipiélago. Las importaciones españolas aumentaron del 7.3% en 1881 al 32.1% en 1893, convirtiéndose España en el primer país importador de mercancías a Filipinas. Se incentivaron también las líneas de transporte y se primaron los fletes procedentes de la Península.

Los propósitos que animaban las medidas adoptadas por el Gobierno se vieron favorecidas por la suma de varias circunstancias: la apertura del Canal de Suez, que facilitó notablemente las comunicaciones; la búsqueda general por parte de las grandes potencias de mercados reservados, —en una época de proteccionismo extremo—; el grado de maduración alcanzado por el capitalismo español; la crisis en las Antillas —que despertó un nuevo deseo de trasvase de capitales hacia otras áreas.

Todo ello hizo que se intensificara el interés peninsular por las posibilidades económicas del archipiélago oriental. A consecuencia de lo cual se produjo una efectiva penetración económica española en Filipinas, tanto a nivel oficial como en el privado. Se creó una gran empresa con capital mixto, español y extranjero, la *Compañía General de Tabacos de Filipinas* y se potenciaron las empresas españolas ya asentadas en las islas, por ejemplo, la compañía de los hermanos *Muñoz de Bustillo*, floreciente empresa dedicada a la exportación de ábaca en Albay. Se establecieron líneas marítimas subvencionadas por el Estado, ejemplificadas en la *Compañía Tra-*

atlántica. El comercio internacional, aunque vio como disminuían sus importaciones a las islas, mantuvo una importancia considerable en el desarrollo y en la producción del archipiélago, gracias al volumen de las exportaciones de productos filipinos, lo cual permitió que se generaran unos ingresos significativos mediante las rentas de aduanas. Junto a ello, se establecieron otros tipos de tributos: la cédula personal, un nuevo impuesto sobre actividades urbanas y comerciales, y un gravamen sobre utilidades que se cobraba por tributación directa. De esta forma, se consiguió, nuevamente, un sistema económico saneado. En 1897, un año antes de la pérdida de las islas, la administración española en Filipinas había conseguido remontar la crisis y obtener unos ingresos que cubrían un 97% del presupuesto de la colonia. Es necesario, pues, resaltar que en las últimas décadas del siglo XIX la hacienda filipina había mejorado hasta el punto de volver a ser autosuficiente, y que las expectativas económicas eran favorables. Nada hacía preveer el inmediato fin del gobierno español.

LA NACIÓN FILIPINA

A lo largo del siglo XIX se definieron los perfiles de una nueva sociedad filipina, en la que se consolidaban unas élites desarrolladas, emergían nuevas clases sociales, y comenzaba a formarse, desde una profunda diversidad, una conciencia nacional. Desde fines del XVIII se había ido consolidando una élite filipina de hacendados y comerciantes, que adquirieron una importancia económica y política creciente. Se dedicaban fundamentalmente a una agricultura orientada a la exportación. Dadas las peculiaridades de la economía en Filipinas, en donde la metrópoli no era el motor fundamental de las actividades económicas, ni controlaba sus mecanismos de acción, establecieron sus relaciones no con comerciantes españoles que ejercieran de intermediarios entre la colonia y el exterior, sino directamente con empresas británicas, alemanas y norteamericanas, o con comerciantes chinos. Su mercado no era pues, España, sino otras potencias con las que comerciaban directamente. Esa situación estuvo en el origen de la divergencia de intereses entre filipinos y españoles.

Esta élite filipina no era un grupo homogéneo, pues a menudo sus intereses diferían dependiendo de su origen territorial, o según su actividad fueran las plantaciones de azúcar de Pampanga o Negros, los cultivos de arroz de Luzón, la recogida de ábaca, o de otros productos que requerían necesidades y actuaciones distintas. A pesar de esas diferencias, se fueron definiendo como un nuevo grupo social, económico y político, no uniforme, pero, cada uno desde su posición, impulsor de cambios en Filipinas y por tanto fundamental en la forja de la nación.

A la par de estos grupos, a menudo entrelazados, se fue formando también una clase ilustrada, educada en universidades filipinas, que frecuentemente completaba su formación en instituciones europeas o americanas. Este grupo fue esencial en la formación de una conciencia nacional filipina. A través de sus escritos definieron los rasgos esenciales de esa identidad, criticaron sus defectos e impulsaron una regeneración, en aras de la construcción nacional que paulatinamente fue llevando a la reclamación del autogobierno y la independencia.

También fue cobrando importancia una clase de campesinos filipinos, menos potentes económicamente, pero igualmente concienciados de la necesidad de una reivindicación de sus derechos frente a la administración colonial y frente a la posición que ocupaban las órdenes religiosas en las islas como propietarias y arrendatarias de tierras. Los líderes nacionalistas buscaron conscientemente la colaboración de estos campesinos, y también de la incipiente clase obrera de las ciudades, convencidos de que para que triunfase una rebelión contra las autoridades españolas era necesario contar con la colaboración de las masas, y no sólo con la actuación de unas élites sin apoyos y sin bases.

Otro sector fundamental en la formación de una identidad filipina y en la lucha por la igualdad de derechos, lo constituyeron el clero nativo y los movimientos religiosos autóctonos de las islas. El clero nativo se encontraba en conflicto con la administración colonial porque ésta había intentado, desde las primeras décadas del siglo XIX, y a instancias de las órdenes religiosas, contrarrestar la influencia que pudieran tener entre la población, limitando cada vez más la acción parroquial que podían desarrollar.

Todos estos grupos, hacendados filipinos, élites económicas, clases ilustradas, campesinos y obreros asalariados, clero nativo, y movimientos

religiosos populares, se unieron contra la administración española, en una lucha común por la independencia que les permitiera el desarrollo de una nación libre en la cual cada grupo pudiera llevar a cabo sus intereses. Sin embargo, pese a la coincidencia de intenciones, la lucha nacionalista que fue forjando la nación filipina no fue un movimiento uniforme. El objetivo común era la lucha por sus derechos y la independencia de España. Pero existieron intereses distintos y división de opiniones en el seno del movimiento, por lo que a menudo las distintas fracciones eligieron vías de expresión y medios diferentes para manifestar su descontento contra España.

En el origen del movimiento independentista filipino se pueden diferenciar distintos motivos de conflicto. En primer lugar, la reclamación de igualdad, libertades y derechos políticos protagonizada por los ilustrados filipinos, que se sumaba al descontento popular ante los abusos cometidos por los representantes de la administración española. En segundo lugar, el descontento por la destacada posición que ocupaban las órdenes religiosas españolas en muy variados sectores de la vida de las islas; descontento que se veía, además, agravado por la situación de trato desigual y de diferencia de oportunidades, derechos y funciones entre el clero español y el nativo. La resistencia contra la labor misional de las órdenes era importante también porque en Filipinas existía una profunda diversidad religiosa, con cultos muy arraigados entre la población, como podían ser las creencias animistas, la religión musulmana o formas sincréticas de cristianismo milenarista. En tercer lugar, la disconformidad con el sistema de propiedad de la tierra, controlada en gran medida por las órdenes religiosas, lo cual dificultaba el despegue económico, —agrario e industrial—, de una nueva clase filipina cada día más implicada en la transformación económica de su nación.

El descontento popular se había manifestado reiteradamente a lo largo del siglo XIX, en movimientos de protesta de distinto signo, el más destacado de los cuales fue el motín de Cavite de 1872. A partir de los años 70 la élite ilustrada se organizó a través del *Movimiento de Propaganda*, para luchar en favor de la igualdad legal, la reforma institucional y la modernización económica. Este movimiento presentó sus primeras demandas todavía dentro del marco colonial, sin cuestionar la relación con España. Pero cuando comprendieron que el Estado español no atendería sus re-

clamaciones y no les reconocería como iguales, modificaron sus objetivos, y a partir de 1890, comenzaron a luchar por el autogobierno y la independencia.

Las ideas de este grupo quedaron representadas por el primer líder del movimiento independentista filipino, José Rizal. Nacido en el seno de una familia acomodada e ilustrada, su padre explotaba una plantación de azúcar y su madre era una mujer culta. Cursó medicina en la Universidad de Santo Tomás. Amplió sus estudios en España, donde dirigió una organización de filipinos que publicaba su propio periódico, *La Solidaridad*, y también amplió su educación en Francia y en Alemania.

Entre sus obras están *A la juventud filipina* (1879), *El consejo de los dioses* (1880), la más destacada, *Noli me tangere* (1887) y *El filibusterismo* (1891). En sus escritos Rizal abogaba por la reforma del gobierno colonial y por la modernización del país. Defendía la representación en Cortes y demandaba la garantía de todas las libertades democráticas; solicitaba que los filipinos pudieran ocupar puestos en su propio gobierno y que, aunque las órdenes religiosas permanecieran en Filipinas, no ejercieran tareas políticas. Es decir, era, en origen, un reformista convencido, pero las soluciones que proponía no cuestionaban la unión con España.

Su posterior radicalización política tuvo mucho que ver con cuestiones personales. En 1890 fueron requisadas a su familia las tierras que explotaba en Calamba, con la excusa de que no pagaba las rentas necesarias a los propietarios dominicos. Rizal recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo, pero cuando su causa fue rechazada, comprendió que los derechos de los filipinos nunca se reconocerían frente a los de los españoles, y que no debían esperar a que fuera la administración colonial la que llevara a cabo las reformas, porque de esa forma nunca llegarían. Decidió regresar a su país para concienciar a su pueblo de que era necesario luchar por las reformas y prepararse para el autogobierno. Ese camino, preconizaba todavía, debía hacerse de manera pacífica, evitando cualquier acción violenta.

Con ese objetivo, en Junio de 1892, Rizal regresó a Manila y fundó la *Liga Filipina*. Sin embargo, el Gobernador General, temeroso de la influencia que pudiera tener entre sus conciudadanos, le arrestó por un motivo futil y le exilió a Dapitán. Aunque sus seguidores trataron de proseguir la defensa de sus ideales siempre por métodos pacíficos, dirigidos por

Domingo Franco, un industrial de Visayas, pronto hubo otro sector que se hizo con el liderazgo de la lucha por la independencia.

Era el *Katipunan*, formado por Andrés Bonifacio. Sus ideas eran más radicales y reivindicaban el uso de la violencia para lograr los cambios deseados. Tenían el apoyo de la pequeña burguesía y de la población urbana y rural menos favorecida. El movimiento se fue extendiendo gracias a una gran labor de propaganda a través del periódico *Kalaayan*, en el que se llamaba ya a los filipinos a la lucha armada contra los españoles. Paulatinamente fueron organizando una lucha de guerrillas, con gran éxito popular. Finalmente, el 26 de Agosto de 1896, Bonifacio, en una reunión conocida como *el Grito de Balintawak*, en un gesto simbólico contra las autoridades coloniales, rompió su cédula personal, y ratificó la decisión de levantarse en armas contra el Gobierno español.

Cuatro días más tarde la rebelión había estallado en las islas. Comenzó en Manila y se extendió rápidamente por sus alrededores. El Gobernador Ramón Blanco telegrafió a España pidiendo refuerzos y el 30 de Agosto declaró el estado de emergencia en ocho provincias. Estableció un período de gracia de cuarenta y ocho horas, declarando que si en ese tiempo los insurrectos se rendían, no sufrirían represalias. Su propuesta no tuvo éxito, y la insurrección se extendió por toda la isla.

En el enfrentamiento entre españoles y filipinos fueron arrestadas muchos ilustrados que se habían destacado en la lucha por el desarrollo y la independencia de su nación. Entre ellos José Rizal, que fue fusilado el 30 de Diciembre de 1896. Fue un tremendo error humano y político. Rizal era el símbolo de la lucha por la independencia y como tal fue castigado, a pesar de no tener nada que ver con los últimos acontecimientos acaecidos en Filipinas. Cuando estalló la insurrección estaba en un barco rumbo a Cuba, donde iba a trabajar como médico, pero al llegar a Barcelona fue apresado y reenviado a Manila, donde se celebró un juicio sumarísimo en el cual fue condenado a muerte. Sin embargo, Rizal nunca apoyó el enfrentamiento armado contra España. Con su muerte se convirtió en el héroe de la revolución.

Durante los meses siguientes, al hilo de las batallas, se originó un problema de liderazgo en el movimiento independentista, entre dirigentes que encarnaban distintos grupos sociales. Bonifacio, que no era un militar

ni gran estratega, comenzó a perder posiciones. Frente a él emergió la figura de Emilio Aguinaldo, un terrateniente mestizo, oficial del ejército, y victorioso en sus maniobras en torno a Cavite. En Octubre de 1896, Aguinaldo redactó sendos manifiestos al pueblo filipino, a través de los cuales trataba de organizar la lucha revolucionaria contra los españoles. En medio de la refriega, y con profundas disensiones en el movimiento insurreccionista, en Marzo de 1897, se creó un gobierno revolucionario, para el cual Aguinaldo fue elegido presidente, mientras que Bonifacio era nombrado ministro de interior. Sin embargo, las luchas intestinas entre los partidarios de cada uno de los líderes, defensores de proyectos políticos diferentes, provocaron conjuras y reuniones que acabaron en un juicio contra Bonifacio, en el cual éste fue considerado culpable de traición y condenado a muerte. Aguinaldo revocó la pena, pero en una maniobra todavía hoy poco clara, un pistolero asesinó al fundador del Katipunan el 10 de Mayo de 1897. Aguinaldo quedaba como líder indiscutible del movimiento independentista filipino.

Desde principios de 1897 un nuevo Gobernador General, Camilo Polavieja, había intensificado la lucha contra los revolucionarios. En Mayo, Manila y Cavite habían vuelto a manos españolas. Aguinaldo tuvo que refugiarse en Biac-Na-Bató. Allí reagrupó sus fuerzas, y, en Noviembre de 1897, promulgó la primera constitución filipina, que defendía una carta de derechos fundamentales, la separación de España y la declaración de Filipinas como república independiente.

Dado que la lucha armada continuaba sin solución inmediata, se nombró a otro Gobernador General, Fernando Primo de Rivera, que intentó un nuevo método para acabar con las hostilidades. Invitó a Aguinaldo a negociar una paz justa. Las negociaciones fueron largas y hubo al menos dos pactos preliminares. Finalmente, el 14 de Diciembre de 1897, se llegó a un acuerdo definitivo, el *Pacto de Biac-Na-Bató*. En él se establecía que España pagaría 800.000 pesos a los rebeldes a cambio de que entregasen las armas y reconocieran la soberanía de España. Se introducirían reformas —no especificadas— una vez que la paz se hubiera restablecido. Aguinaldo y otros veintisiete líderes revolucionarios serían conducidos a Hong-Kong. Este acuerdo acabó con la revolución, aunque sus cláusulas no fueron totalmente cumplidas por ninguna de las dos partes, y ni la suma de dinero

se distribuyó de la manera pactada, ni las reformas fueron las esperadas. Tampoco se entregaron todas las armas ni la lucha cesó de manera absoluta. Pero el Gobierno español pudo decir que empezaba 1898 con las islas prácticamente pacificadas y un renovado interés por su futuro, que se reflejaría en nuevos propósitos políticos y en una fuerte incentivación de la economía filipina.

LOS INTERESES INTERNACIONALES EN FILIPINAS

A fines del siglo XIX el archipiélago filipino despertaba el interés de las grandes potencias como territorio ultramarino con una serie de ventajas propias de su condición: tenía una economía en crecimiento, con un prometedor futuro ante sí; era capaz de suministrar materias primas y productos tropicales necesarios o apetecibles para las industrias europeas; representaba un mercado donde vender mercancías manufacturadas ofrecía incentivos a los inversores, gracias a la construcción de vías ferroviarias, carreteras, puentes y otras infraestructuras, o mediante la explotación de empresas agrarias; significaba un punto estratégico muy valorado en el tendido de vías de comunicación a través del Pacífico, por su situación frente a las costas asiáticas. Dadas estas peculiaridades, y en plena época de expansión colonial de las grandes potencias, las islas pronto se convirtieron en una encrucijada de intereses internacionales, y desde mediados del siglo XIX se establecieron en ellas compañías de comercio, empresas agrícolas, de ingeniería o construcción, bancos y navieras de muy distintos países.

En un análisis comparado de los intereses de las potencias en Filipinas, vemos que Gran Bretaña era el país que tenía mayor implicación en las islas. Su relación con el archipiélago había comenzado muchos años antes, cuando las islas todavía estaban cerradas al tráfico europeo, pero barcos ingleses en tránsito desde puertos asiáticos o desde Australia surcaban ya aquellas aguas. Se había incrementado durante la ocupación británica de Manila, de 1762 a 1764, que supuso para los ingleses una oportunidad para conocer el valor de aquella ciudad como puerto frente a las costas orientales. Y se consolidó definitivamente a partir de 1834, cuando Manila

se abrió oficialmente al comercio internacional. En principio, los británicos trabajaban como exportadores de productos filipinos, inicialmente de arroz y otros cultivos de subsistencia, que vendían en puertos del entorno; posteriormente, según fue cambiando la demanda internacional, se dedicaron a otros productos que proporcionaban un mayor margen de beneficios y que se destinaban ya a mercados europeos, americanos o australianos, tales como azúcar, ábaca, tabaco, café o índigo. En origen tenían agentes locales que eran los encargados de recolectar los productos antes de la llegada de cada barco. Al aumentar el interés de este tráfico comercial, fueron estableciendo empresas y creando plantaciones propias. Poco a poco se fueron interesando también por el comercio con Filipinas propiamente dicho, trayendo de otros lugares aquellos productos demandados en las islas y vendiendo textiles manufacturados británicos.

De tal forma, desde comienzos del XIX, se empezaron a establecer en Filipinas firmas británicas y a fines de siglo los británicos dominaban el 70 % del comercio de exportación e importación con las islas, además del transporte de los productos, que hasta en un 80% se hacía en barcos británicos —esta tendencia cambiaría con la nueva política aduanera adoptada por España en los años 80, que favorecía los fletes procedentes de la Península. Desempeñaban también un papel fundamental en las comunicaciones de las islas: ingenieros ingleses habían construido el único ferrocarril que existía, de Manila a Dagupan, habían trazado varias carreteras, controlaban el cable Manila-Hong-Kong y trabajaban en un proyecto para extenderlo a Panay y Cebú. El nivel de negocios hizo que a mediados de siglo se abrieran en las islas sucursales de bancos británicos. En 1873 se estableció el *Chartered Bank of India, Australia and China*, y en 1875 el *Hong-Kong & Shanghai Banking Corporation*.

Por su parte, los Estados Unidos fueron aumentando las relaciones comerciales con Filipinas a lo largo del siglo XIX, hasta convertirse en el segundo país en las exportaciones procedentes de aquellos archipiélagos, y en el cuarto en las importaciones hacia las islas. Eran grandes consumidores de azúcar, ábaca y copra filipina, aunque también compraban tabaco, arroz, café, bambú y frutas tropicales. Vendían tejidos manufacturados, productos metalúrgicos y víveres. En las islas estaban establecidas compañías norteamericanas dedicadas principalmente a la exportación de pro-

ductos agrícolas filipinos, y que únicamente en los últimos años del siglo comenzaron a interesarse por la importación de bienes manufacturados. Los intereses norteamericanos en Filipinas estuvieron siempre muy directamente relacionados con el comercio con China y con los principales puertos asiáticos.

El interés de Francia por Filipinas estaba relacionado en gran medida con su colonia de Indochina, desde donde comerciaban con caucho, carbón, y, en determinadas coyunturas, arroz; además, se establecieron en las islas compañías francesas exportadoras de ábaca, azúcar, ron y licores; capitalistas franceses se involucraron en la Compañía General de Tabacos de Filipinas; y la *Société Eiffel* dedicada a la construcción de puentes metálicos.

China era un caso peculiar. No tenía intereses oficiales como Estado, pero la comunidad china desempeñaba un papel fundamental en la economía de las Filipinas. La colonia de residentes de esta nacionalidad era muy numerosa, y al ser una población enormemente laboriosa, pronto se hicieron con el control del pequeño comercio, el tráfico entre islas y los préstamos a escala reducida.

El interés de Alemania por las Filipinas era notable desde mediados de siglo, pero se incrementó sobre todo en los años 80 y 90, a raíz del impulso de la expansión colonial alemana por el Pacífico y del apoyo oficial a las empresas alemanas que desde hacía muchas décadas operaban por este ámbito. Estas compañías se dedicaban a la exportación de copra y otros productos tropicales, y, en menor medida, a la importación de maquinaria, metales o elementos de construcción. Pero la atención alemana a estas islas no se puede medir sólo en términos económicos, sino que hay que ponerla en relación con el imperio que Guillermo II quería construir en el Pacífico. El Gobierno alemán manifestó en las últimas décadas del XIX un constante interés por hacerse con algún punto en el sur del archipiélago filipino e incluso alguna de las islas españolas de la Micronesia, que pudiera sumarse a las posesiones que ya tenía en las Marshall, Nueva Guinea o Samoa, y que le diera mayores oportunidades en sus ambiciones frente a China.

Japón tenía intereses en Filipinas desde hacía muchos años. Había fomentado el comercio entre los dos archipiélagos —importaba de Filipinas

ábaca y otras fibras vegetales, tabaco, añil, metales, frutas y café; exportaba seda, algodón, abanicos, fósforos, pinturas, papel, madera, laca y porcelana—, había inagurado una línea de comunicaciones directa entre Tokio y Manila —*Nippon Isue Kaisha*—, e intentaba establecer colonias de poblamiento y de explotación en las islas. El Gobierno japonés mostró un enorme interés por estos proyectos, pero las autoridades coloniales españolas mostraron una gran reserva ante sus iniciativas, temiendo que una penetración japonesa pudiera suponer una amenaza para la soberanía española en Filipinas, razón por la cual frenaron cualquier opción en este sentido, a pesar de considerar necesaria para el desarrollo económico de las islas mano de obra cualificada, tal como era la japonesa. Prefirieron apostar por la seguridad de la colonia que por el crecimiento a un precio que hubiera podido convertirse en un peligro para la presencia española.

LAS AMBICIONES DE ESTADOS UNIDOS EN FILIPINAS DURANTE LA GUERRA HISPANO-NORTEAMERICANA

La guerra hispano-norteamericana de 1898, desencadenada entre España y Estados Unidos por Cuba, tuvo una inesperada repercusión en el Pacífico. Recordemos que la primera acción bélica de la contienda tuvo lugar en Filipinas.

A los pocos días de iniciarse la guerra, cuando aún no se había producido ningún enfrentamiento armado en las Antillas, el comodoro George Dewey atacó a la flota española en Filipinas, mandada por el Contralmirante Patricio Montojo, obteniendo una rápida y definitiva victoria naval.

En la madrugada del 1 de Mayo de 1898, la escuadra norteamericana, compuesta de siete acorazados y dos mercantes bien artillados, entró en la bahía de Cavite y, en una violenta y efectiva ofensiva, abrió fuego nutrido contra los seis cruceros y tres cañoneros de la flota española, en su mayor parte desprotegidos y mal arbolados. En la primera embestida ardió las quillas de madera del *Reina Cristina*, *Antonio de Ulloa*, *Castilla* y *D. Juan de Austria*. Tras un breve receso para reponer fuerzas y municiones, se reanudó la batalla. Los barcos españoles supervivientes se agrupa-

ron para intentar una contraofensiva. Vano intento. Veinte minutos más tarde toda la flota española estaba fuera de combate. A las 12'30 se daba la orden de alto el fuego y en Cavite se izaba bandera blanca. Atrás quedaban 58 muertos, 236 heridos y 9 barcos hundidos por parte española, frente a los 25 fallecidos, 50 malheridos y un barco incendiado por parte norteamericana. De esta forma, el 1 de Mayo, y en siete horas de combate naval, se perdieron las fuerzas navales en el Pacífico y los españoles se jugaron su suerte en Filipinas.

Las razones oficiales que el Gobierno norteamericano esgrimió para extender la guerra hacia ámbitos orientales fueron de tipo estratégico. McKinley justificó la acción explicando que había sido necesario destruir las fuerzas españolas en Oriente para impedir un ataque a la costa oeste norteamericana que hubiera obligado a abrir un segundo frente de confrontación. Consegúan con ello, además, debilitar al enemigo y contar con una baza más a la hora de negociar la paz. Esto es, había sido una maniobra bélica basada en razones tácticas y defensivas, sin ulteriores pretensiones territoriales.

Los sucesos de Cavite no fueron una sorpresa para el Gobierno norteamericano. Estrategas de la Marina llevaban más de dos años elaborando planes, conocidos por el Ejecutivo, para que, en el caso de que se iniciara una guerra con España en las Antillas, inmediatamente se neutralizara la escuadra española en Oriente. Además, desde hacía varios meses Dewey preparaba en Hong Kong un escuadrón asiático, mientras aguardaba instrucciones para actuar en aquel ámbito según se desarrollaran los acontecimientos. En esa tensa espera, el 25 de Febrero, le llegó el mismo telegrama que Theodore Roosevelt, ayudante del Secretario de Marina, e impaciente por iniciar una política de engrandecimiento exterior, aprovechando una ausencia de su superior, había enviado a todos los jefes de escuadrones navales. En él les ordenaba que se aprestaran para una acción inminente contra España. Dewey sabía que en ese caso su objetivo serían las Filipinas. Al conocer la iniciativa de Roosevelt, McKinley revocó rápidamente la orden en todos los escenarios, excepto —significativamente— en el Pacífico. Y el 24 de Abril, rotas ya las hostilidades con España, el Presidente confirmó el sentido de las instrucciones anteriores, ordenando a Dewey atacar la flota española en Filipinas.

La victoria de Cavite obligó al Gobierno norteamericano a plantearse el alcance de la intervención en Filipinas. Debía decidir si, una vez conseguidos los objetivos tácticos previstos, se retiraba del archipiélago; si, por contra, consolidaba en tierra el triunfo naval, tomando el puerto o la ciudad de Manila como base naval, transitoria o permanentemente; esta última posibilidad exigiría considerar la situación en que se quedaría el resto del archipiélago. Detrás de cada una de esas opciones estaba el problema del verdadero propósito del Gobierno de McKinley en Filipinas.

Al atacar Cavite, ¿pretendió únicamente destruir la flota española y neutralizar las islas durante la guerra? ¿quiso, además, adquirir una base naval? ¿o deseó desde el principio hacerse con la totalidad del archipiélago filipino? Y junto a ello, ¿los planteamientos respecto al futuro de las Filipinas, fueron un problema cuestionado antes del ataque? ¿o fue la victoria de Dewey la que hizo plantearse por primera vez que había que trazar una línea de actuación en ese archipiélago?

En suma, ¿hubo una intencionalidad premeditada, con objetivos definidos, en el ataque a Manila? ¿o el desarrollo de los acontecimientos fue fruto de decisiones posteriores, marcadas por la marcha de los acontecimientos?

Los papeles de McKinley, sus discursos tras la acción, tratan de justificar que no hubo una intención previa en el ataque a Manila, ni pretensión de hacerse con parte alguna de las Filipinas. Sin embargo, los hechos parecen desmentir las afirmaciones oficiales. El estudio de la documentación ha permitido que, frente a la imagen de un presidente débil y dubitativo, sobrepasado por las circunstancias y manejado por la prensa y otros grupos de presión, que durante muchos años nos ha presentado la historiografía, se imponga una nueva interpretación. Hoy en día se defiende que, en el caso de las Filipinas, McKinley actuó con premeditación política, sabiendo lo que hacía, apoyando conscientemente la expansión de los Estados Unidos hacia el Extremo Oriente. Manióbró con habilidad y prudencia, pero teniendo muy claros los objetivos, negociando suavemente hasta ganar los apoyos necesarios para que su causa fuera popular y consensuada. No hizo grandes discursos preliminares. No declaró que en la guerra pretendiera base naval alguna. No preparó abiertamente la nación para una acción bélica en el Pacífico. No emprendió una campaña nacional previa

en favor de anexiones ultramarinas. Sin embargo, su actuación en Filipinas abrió las puertas hacia el Pacífico, afirmó la presencia de los Estados Unidos en el Extremo Oriente, e inició una nueva política mundial para este país.

Al iniciarse la guerra con España, McKinley siguió la recomendación de los oficiales de inteligencia de la Marina de atacar la flota española en Oriente y neutralizar las Filipinas. Pero lo significativo fue que, una vez logrado ese objetivo, tras la victoria de Dewey, no retiró sus fuerzas del archipiélago, sino que consolidó la victoria naval, emprendiendo por tierra la toma de Manila.

El primer paso para ello fue el envío de una expedición militar que el 4 de Mayo—sólo tres días después de la victoria de Cavite—partió de San Francisco. Cinco mil hombres habían estado allí concentrados en espera de instrucciones. Su objetivo era conquistar Manila, reducir las fuerzas españolas y asegurar el orden en esa ciudad mientras estuviera en manos norteamericanas. Tras esa primera expedición, a lo largo del verano del 98, fueron enviadas nuevas tropas, y a fines de Julio había ya 16.000 hombres defendiendo la posición norteamericana en Filipinas.

Días después, el 11 de Mayo, McKinley presentó un memorándum al Gobierno español, en el cual reclamaba ya la cesión de una estación de carboneo en Filipinas, presumiblemente Manila. Lo cual implica que desde primeros de Mayo el Gobierno norteamericano estaba trabajando para asegurarse una base en aquel archipiélago.

Con el fin de que nada limitara su libertad de acción en Filipinas, desde Washington se enviaron instrucciones para romper la línea de colaboración que se había establecido con los independentistas filipinos, en la lucha común contra los españoles. Era preferible no contraer compromisos ulteriores que pudieran constreñir la línea de actuación en el futuro. McKinley quería saberse libre a la hora de decidir el alcance de su implicación en Filipinas.

Tampoco quiso complicaciones internacionales. Por ello desde primeros de Junio, con discreción y prudencia, diplomáticos norteamericanos destinados en puestos claves informaron a los gobiernos ante los cuales estaban destacados que, aunque todavía era imposible definir la disposición final de las Filipinas, McKinley se reservaba el derecho a decidir el futuro de estas islas y no toleraría injerencias externas en la cuestión.

Paralelamente, McKinley decidió ocupar una serie de puntos que permitieran asegurar una red de comunicaciones a través del Pacífico, toda ella bajo dominio norteamericano. El objetivo más importante en esa línea fue Hawai. El Presidente solicitó en el mes de Junio a ambas Cámaras la anexión de esa isla —objetivo largamente acariciado por numerosos círculos—, como imperiosa necesidad de guerra —la flota requería urgentemente una base naval en mitad del Pacífico desde la que acudir en auxilio de las tropas que peleaban en Filipinas. Venciendo la reticencia de los sectores más reacios —demócratas, antiexpansionistas, plantadores de azúcar, grupos temerosos de problemas raciales—, McKinley logró la aprobación del Congreso y del Senado, y el 12 de Agosto Hawai se incorporó formalmente a los Estados Unidos. Otra isla elegida como escala en esa ruta de comunicaciones fue Guam, en el archipiélago de las Marianas. El 20 de Junio barcos norteamericanos entraron en la bahía de Agaña, y, aprovechando la sorpresa de las autoridades coloniales españolas que les recibieron sin recelo alguno, puesto que ignoraban el estado de guerra entre los dos países, izaron la bandera y declararon la isla territorio americano. Pocos días después ocuparon también la isla de Wake, que sería formalmente anexionada en Enero de 1899.

Estos hechos parecen sugerir que McKinley deseaba potenciar la presencia de los Estados Unidos en el Pacífico y que aprovechó la guerra con España para hacerse con una base naval en Filipinas. Todas las acciones emprendidas tras la victoria de Cavite se encaminaron a consolidar la posición norteamericana en esas islas. La única duda, el único planteamiento por debatir, fue hasta dónde iba a llegar la conquista.

En las reuniones que el Gobierno celebró en el verano de 1898 para decidir los términos de la paz con España, las opiniones respecto a qué hacer con las Filipinas estuvieron divididas. Tres miembros del Gobierno, Wilson, Bliss y Griggs, querían tomar todas las islas. Otros tres, Day, Gage y Long, favorecían la toma de una única base naval. Para salvar las diferencias, McKinley consiguió que se aprobara su propuesta: retener Manila y esperar acontecimientos para decidir la postura final respecto a las islas, de esta forma, en el Protocolo de Paz firmado entre los dos países el 12 de Agosto, se estableció que los Estados Unidos ocuparían y retendrían la ciudad, puerto y bahía de Manila hasta la conclusión de un trata-

do que determinaría los términos definitivos sobre el control y gobierno de Filipinas.

Para negociar las disposiciones de paz definitivas, McKinley nombró en Septiembre de 1898 una comisión compuesta por cinco miembros: el secretario de Estado Day, que representaba al sector más moderado de los republicanos; el senador demócrata Gray, de Delaware, defensor de la política de la «*little America*» y convencido anti-imperialista; el senador Davis, de Minnesota, partidario de la expansión de los Estados Unidos; el senador Frye, de Maine, uno de los grandes defensores de la anexión de Hawai; y Whiltelaw Reid, editor del *New York Tribune* y decidido partidario de la expansión imperialista. Tres de los miembros de la comisión eran, por tanto, partidarios de la expansión exterior, y tenían la mayoría en las votaciones.

En las primeras instrucciones que McKinley envió a la Comisión de Paz en el mes de Septiembre, se especificaba que debían trabajar para obtener la cesión de la isla de Luzón. Sin embargo, esa solución se demostró pronto inoperante. La opinión de los expertos coincidió en señalar que era imposible quedarse con Luzón sin tomar en consideración lo que le ocurriría a las demás islas. Porque si los norteamericanos se quedaban únicamente Luzón, ¿quién gobernaría el resto del archipiélago? Las alternativas eran limitadas. Los españoles podrían mantener su soberanía en el resto del archipiélago filipino y continuar su presencia en las islas, tal como era antes de la intervención norteamericana. El Presidente sabía que esta opción sería extremadamente impopular en Estados Unidos, inmersos en una guerra contra las barbaridades de los españoles en sus colonias, y no quiso afrontar los riesgos políticos de tal posibilidad.

La segunda alternativa era que los filipinos se hicieran cargo del gobierno de su nación. Esta línea hubiera sido coherente con los compromisos adquiridos por los norteamericanos con los líderes nacionalistas filipinos, que les ayudaron en su batalla contra los españoles en Manila, creyendo que tal conducta les conduciría hacia una independencia avalada por Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno de McKinley temió los posibles tintes revolucionarios de un autogobierno filipino, y escuchó las advertencias de las autoridades que les avisaban de los problemas de caos y guerra civil si se seguía esta opción. Declaró que los filipinos eran una

nación joven, aún no preparada, no madura políticamente, para ese autogobierno, y que por tanto su país, campeón en asuntos de democracia, tutelaría el camino hacia la plena independencia.

La tercera opción hubiera sido que una o varias potencias europeas, o incluso Japón, accedieran al gobierno de Filipinas. Bien haciéndose cargo de la administración de estas islas a título individual. Bien creando una compañía multinacional que las gobernara. Obviamente, al Gobierno de McKinley, esta posibilidad le parecía inadmisibles por razones políticas, estratégicas y económicas. No estuvo dispuesto a ceder nada de lo conquistado ante sus principales rivales en la carrera colonial.

En esa situación, se hizo evidente que si Estados Unidos quería retener una base naval en Manila, tendría que ocupar la isla de Luzón. Y que para mantener Luzón en paz y sin problemas amenazando la presencia americana, convenía anexionarse el archipiélago completo. McKinley decidió que la única solución era anexionarse todas las Filipinas. Por ello, en el mes de Octubre envió a París nuevas instrucciones en las que se ordenaba solicitar la cesión de todo el archipiélago.

De los cinco miembros de la Comisión de Paz, tres aceptaron las implicaciones que tal política conllevaba. Davis, Frye y Reid se mostraron convencidos de que las islas no podían separarse, por lo que recomendaron que si se quería retener Luzón, debían tomar el resto del archipiélago. Según su opinión, el deseo de mantener Luzón fuera de cualquier amenaza, las ventajas comerciales que presentaba el archipiélago, junto con la obligación moral de no poner de nuevo a los filipinos bajo el dominio español, les obligaba a tomar todas las Filipinas. En tal sentido se inclinaron en el informe final enviado a Washington el 25 de Octubre. El antiguo Secretario de Estado Day, a pesar de los consejos recibidos, fue partidario de adquirir únicamente una base naval. Sugirió retener para tal fin la isla de Luzón, Mindoro o Palawan, y, al tiempo, firmar un acuerdo con España por el que ésta se comprometiera a no ceder ninguna otra isla del archipiélago sin el consentimiento de los americanos. Sólo el senador demócrata Gray se opuso totalmente a cualquier aventura imperialista. A su juicio, una vez acabada la guerra con España, se debían abandonar todas las Filipinas. Cualquier otra actuación iría en contra de los principios en los que se asentaba la nación norteamericana. No había lugar para una administra-

ción colonial dentro del sistema americano, por lo creía que debía renunciarse a cualquier ambición en el Pacífico. Los informes de la Comisión de París llegaron a McKinley cuando el Presidente ya estaba convencido de que era necesario retener todas las islas.

McKinley tomó la decisión de actuar en tal sentido en Filipinas, ya no sólo por las razones comerciales, estratégicas o internacionales que le podían haber animado al principio del proceso de anexión. Sino porque había comprobado que a esas alturas la mayoría del pueblo norteamericano era partidario de retener las islas.

Las voces para retener Filipinas comenzaron a extenderse nada más producirse la victoria de Dewey y fueron aumentando a lo largo del verano. Diferentes sectores apoyaban esta opción por motivos estratégicos, económicos y morales. En primer lugar, los estrategas y oficiales de la Marina norteamericana, liderados por Alfred Mahan, que deseaban obtener una base naval desde la que defender los intereses americanos en Oriente. Los políticos expansionistas (Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge), partidarios de la participación de Estados Unidos en la política mundial, aprovecharon la ocasión para insistir en la misma dirección.

A las compañías que iniciaban el tendido de cables desde San Francisco a las costas asiáticas y cuyo objetivo era controlar las comunicaciones a través del Pacífico, también les interesaba adquirir una estación en las Filipinas. Además, los comerciantes norteamericanos que trabajaban para obtener beneficios en ese área desde hacía muchos años subrayaron el interés de las Filipinas. El propio cónsul en Manila, Oscar Williams, informó de que el volumen de las exportaciones filipinas a Estados Unidos era muy importante, especialmente en ábaca, azúcar, tabaco, copra, café, arroz y frutas, y que las importaciones de textiles, maquinaria y productos metálicos manufacturados aumentaban rápidamente. Junto al interés que las islas podían presentar por sí mismas, en la primavera y verano de 1898, numerosos círculos de negocios se interesaron por incrementar su participación en el comercio e inversiones en el Extremo Oriente —especialmente en China— y manifestaron al Presidente su apoyo a una política expansiva en esta área. Las Filipinas podía ser una óptima base desde la que desarrollar sus proyectos orientales. En determinados círculos se veía con preocupación como otras potencias les estaban cerrando la puerta a un mercado y

a un campo de inversiones considerado de alto interés. En esas circunstancias la intervención en Filipinas podía proporcionar a Estados Unidos la posibilidad de salir de la posición secundaria que ocupaba en China. Manila podía convertirse en lo que Hong-Kong, Kwangtung o Kiaochow representaban para otros países.

Otro grupo importante que defendió la presencia americana en Filipinas fueron las asociaciones religiosas y los misioneros, que solicitaron la protección gubernamental para desarrollar su labor evangelizadora y educadora en aquellas islas. En general, los metodistas, baptistas, presbiterianos, congregacionistas, episcopalistas y otras confesiones minoritarias eran partidarias de desarrollar una nueva misión religiosa en Filipinas; los quáqueros y los unitarios se oponían a la guerra; los católicos miraban con cierto escepticismo el entusiasmo de los protestantes, señalando que los misioneros españoles ya habían evangelizado las islas, pero en su mayoría acabaron sumándose a los propósitos misioneros de las demás tendencias. Hubo también otros círculos movidos por razones humanitarias, no teñidas de tintes religiosos. Esos sectores defendieron el deber contraído con los filipinos, al igual que con los cubanos, para librarles del yugo español y enseñarles el camino hacia la libertad y la democracia que Estados Unidos encarnaba.

La campaña anti-imperialista también tuvo gran resonancia. Estos círculos consideraron que la expansión colonial iba en contra de los principios y de las tradiciones más básicas en las que se apoyaban los Estados Unidos; entre ellos políticos como Carniage o Cleveland e intelectuales como Mark Twain. Hubo otros sectores que se opusieron a la anexión de las Filipinas por motivos menos altruistas, como los cultivadores de azúcar; los que temieron la incorporación de nueva población multirracial; o los sindicalistas contrarios a la entrada de mano de obra barata. Sin embargo, estas voces se diluyeron ante el clamor popular en favor de la expansión.

Finalmente, un elemento decisivo en todo este asunto fue la opinión pública norteamericana, que a fines del verano del 98 era, en su mayor parte, favorable a la anexión de Filipinas. Antes de tomar una decisión definitiva o de proclamar sus intenciones respecto a las islas, McKinley quiso calibrar el sentir de los ciudadanos. En un viaje intencionadamente

multitudinario que realizó a comienzos del Otoño por el Medio Oeste, olvidó su habitual tono mesurado y pronunció ardientes discursos en favor de la expansión por el Extremo Oriente, defendiendo la actuación norteamericana en Filipinas y subrayando la oportunidades que aquel ámbito ofrecía a los Estados Unidos. Sus mensajes tuvieron una entusiasta acogida en la opinión pública y McKinley tomó buena nota de ello. El Presidente y numerosos miembros de su partido pensaron que ir en contra de esta opinión podría tener resultados políticos nefastos y hacer peligrar, incluso, las posibilidades republicanas en las próximas elecciones presidenciales.

En esas circunstancias, McKinley decidió conscientemente, por motivos políticos, económicos, estratégicos e internacionales, anexionarse las Filipinas para defender los intereses americanos en el Pacífico, en China y en el Extremo Oriente. Por ello, el 26 de Octubre de 1898, envió nuevas instrucciones a la Comisión de Paz, ordenándoles que se hicieran formalmente con todas las Filipinas y que intentaran conseguir alguno de los archipiélagos menores de la Micronesia. La cuestión se negoció en París durante los dos meses siguientes y quedó fijada en el Tratado firmado el 10 de Diciembre de 1898. En virtud del mismo España cedió a los Estados Unidos las Filipinas y la isla de Guam a cambio de una indemnización de veinte millones de dólares. Acababa con ello la larga vinculación colonial entre España y Filipinas, y comenzaba una nueva etapa en la historia de las islas.